



Jornada única en Antioquia con almuerzo en la casa

Si los y las estudiantes pasarán 7 horas en el colegio, se les debe garantizar el almuerzo a mediodía, pero ni eso tienen seguro con la jornada única del gobierno.



En Antioquia, la jornada única implementada por el gobierno tampoco ofrece las condiciones para impartir educación de calidad.

En el departamento, 2.400 alumnos de 16 centros educativos harían parte de la jornada única, 16 colegios en 15 municipios y 6 instituciones en Medellín. Esto se informó en el 2014, la fecha de inicio era febrero del 2015. Sin embargo, la realidad es otra. Esta es la situación de Itagüí, donde solo 2 colegios se subieron al bus de la improvisación.

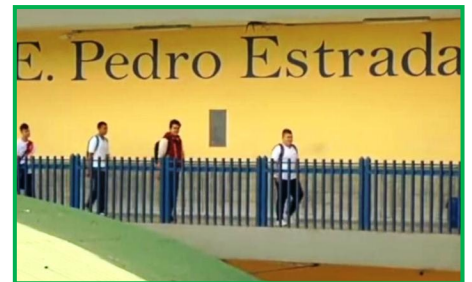
Gabriel Darío Medina, rector del colegio Pedro Estrada, comenta: “nosotros como institución educativa tenemos toda la parte de infraestructura y la posibilidad de que la jornada de la tarde pueda hacer parte de la jornada única. Pero dentro de los criterios para que esta se lleve a cabo está el de garantizar el almuerzo, especialmente, porque aquí tenemos una población vulnerable de estratos 1, 2 y 3, que requiere alimentación; por ello, en

esa jornada extendida de 7:00 am a 3:00 de la tarde, uno de los complementos fundamentales debe ser la nutrición de los estudiantes”.

En este municipio el tema no fue deficiencia en infraestructura sino de falta de un programa de transporte y alimentación para los estudiantes, que pasarán de una jornada de 7:00 am a 1:00 pm a 7:00 am a 3:00 pm. La salida improvisada es que los niños vayan a sus casas, almuercen y regresen bajo su propia responsabilidad, la pregunta obvia es ¿qué pasa si un niño sale del colegio y le ocurre algo? ¿Quién responde?

Vanelly Cristina Cano, contralora del colegio Pedro Estrada, intenta responder: “sería un riesgo mandarlos a almorzar a la casa, debido a que los estudiantes seguirían estando a cargo de la institución y del gobierno, si en algún momento les pasara algo el colegio sería quién debería responder por ellos. De otra parte, si se mira el tema del almuerzo 1.200 pesos no alcanzan ni para un pastel de pollo en la institución”.

Astrid Puerta, madre de familia, sostuvo: “ya que los niños están estudiando seis horas y se les va a extender la jornada hasta las 3:00 de la tarde, ¿cómo van a estudiar y a concentrarse si no han almorzado? Si, por el contrario, los dejan ir a la casa a almorzar, ¿cómo pretende el cole-



gio controlar esto en caso de que algo les suceda a los menores en el trayecto?”.

Los docentes y la comunidad educativa están de acuerdo con la jornada única, pero no de cualquier manera, porque no solo está en riesgo la seguridad de los jóvenes desde lo cognitivo y formativo sino hasta lo nutricional y personal; hasta ahora los entes competentes no responden.

“Nosotros, los padres de familia, teníamos un acuerdo con los alcaldes y las instituciones de que ellos iban a proporcionarles a los estudiantes la alimentación y el transporte, pero vemos que esto no se está cumpliendo”, dice la madre Astrid Puerta.



IE-AL respalda a Fecode para el cumplimiento de acuerdos

La Internacional de la Educación para América Latina, que ha llevado un seguimiento al proceso de negociaciones en Colombia, manifestó su respaldo a Fecode frente al cumplimiento de los acuerdos.

Una comisión de la Internacional de la Educación para América Latina estuvo en Colombia y se reunió con el ejecutivo de Fecode. Privatización de la educación, desmembramiento de la fuerza sindical, respaldo a Fecode, así como el próximo Congreso de la Internacional fueron los temas tratados.

Eduardo Pereyra, secretario relaciones internacionales de la Ctera, afirmó: “estamos aquí para respaldar a Fecode; apoyar la lucha que los trabajadores y trabajadoras de la educación han venido dando en este último tiempo y fundamentalmente; y para exigir al gobierno colombiano que cumpla todos y cada uno de los acuerdos pactados con esta organi-



zación”.

Fátima da Silva, vicepresidente de la IE-AL: “nosotros, desde la Internacional de la Educación, tenemos la claridad que se debe contar con sindicatos cada vez más fuertes, organizados, con fuerte representación social y con reconocimiento de sus bases; pero también exigimos que los gobiernos reconozcan a los

sindicatos de trabajadores y que sean ellos con quienes se sienten a dialogar, para así alcanzar cambios educacionales en los países”.

También dio su visión frente al proceso de diálogo en Colombia: “paz es algo que queremos todos, independiente de la parte del mundo o del continente donde estemos, por ello, Colombia tiene un proceso interno emblemático e histórico, que respetamos y conocemos, pero que también respaldamos en el marco de exigir paz en la sociedad y paz en el campo, porque una nación o un país sólo tiene condiciones de ir delante con desarrollo social y económico, si cuenta con paz interna y externa”.

CUT proyecta acciones de fortalecimiento

La Junta Nacional de la CUT, entre otros aspectos, ratificó su acompañamiento al proceso de paz, pero también su rechazo a todas las políticas de la antilaboral de Santos.



La Central Unitaria de Trabajadores aprobó en la Junta Nacional de los pasados 2 y 3 de julio una serie de acciones para reforzar y estructurarse internamente, y de esta manera enfrentarse al gobierno y su política anti laboral y antisindical en el segundo semestre del año.

“Esta semana sesionó la Junta Nacional de la CUT con una amplia participación de todos los departa-

mentos del país. Allí fundamentalmente se abordó el tema del congreso extraordinario, el congreso de la mujer y de los jóvenes. Así como el plan de lucha que deberá adelantar la Central en el segundo semestre de año, para contrarrestar las políticas del gobierno de santos que cada vez pretenden empobrecer más a los colombianos”, expuso Francisco Maltés, directivo de la CUT.

El segundo semestre del 2015, la CUT presionará la presentación de proyectos de ley sobre recargos nocturnos, la aprobación del pago del 4% no el 12 para los pensionados en el pago de salud. Estas y otras medidas deben ser reforzadas con las movilizaciones, estrategias y

acciones para rechazar en colectivo la política antilaboral de santos.

“La Junta ha aprobado un plan general para enfrentar en mejores condiciones la lucha en rechazo a las políticas que el gobierno viene desarrollando contra los trabajadores del país”, agregó Maltés.

Este ha sido un gobierno de promesas que necesita un freno. En campaña prometió acabar con la



tercerización y es el que más usa esta nefasta figura; que reactivaría las horas extras y cada vez más las

embolata beneficiando a los empresarios; y del salario mínimo y el empleo digno sigue en la teoría; se ha-

bla de reformas tributarias y pensionales; a todo esto hay que hacerle frente con lucha y en las calles.

La inversión de la UNAL se va a universidades privadas

La diferencia entre lo que paga el gobierno por un estudiante en una universidad privada y en una pública, hace que esta última salga perdiendo recursos que no recupera de otra forma.

El gobierno le paga a universidades privadas matrículas costosísimas a los estudiantes que accedieron al programa 'Ser pilo paga', pero a las públicas no las enaltece para que los beneficiarios de este programa las escojan, tampoco les invierte recursos y mucho menos financia su deuda.

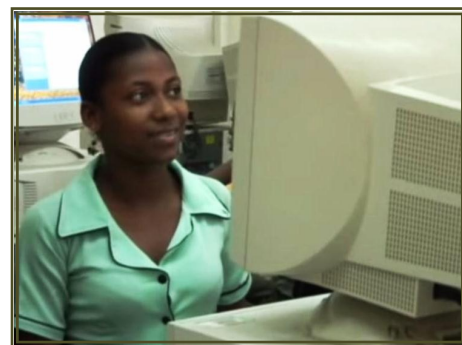
Pedro Hernández, Presidente de Aspu, afirmó: "así como a Los Andes el gobierno le dio 12, 14 o 16 millones de pesos por matrícula y allí fue un número bastante significativo de estudiantes, lo que se calcula que esta universidad, en el semestre que terminó, recibió entre 15 mil y 18 mil millones de pesos, a la Universidad Nacional no le dio por estudiante nuevo absolutamente nada".

Esta realidad desnuda que 'Ser pilo' no le paga a las universidades públicas lo que cuesta un estudian-

te realmente; la situación es peor en el Chocó y regiones apartadas donde el valor de la matrícula de estratos 1, 2 y 3 es máximo de 250.000 pesos. También deja ver que al gobierno no le interesa solucionar el problema educativo de los más vulnerables; mientras tanto, endeuda a las instituciones.

"Las universidades públicas han sido obligadas por el gobierno nacional a recurrir a créditos con intereses supremamente onerosos y alianzas público privadas para dar solución a las graves problemáticas que enfrentan, en lugar de entrar a fortalecer la educación pública para abarcar una mayor cantidad de estudiantes", denunció Sara Abril, representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Unal.

Para maestros y estudiantes, ampliar la cobertura y garantizar



calidad implica una sola decisión. Abril añade: "No es hacer alianzas público-privadas, ni darle créditos a los estudiantes o a las universidades, es financiar la base presupuestal de las universidades para que, de esta manera, se pueda aumentar la cobertura y la calidad". Pedro Hernández agrega: "el ejecutivo no ha querido en sus proyectos de presupuesto, o en el mismo plan de desarrollo destinar recursos para las universidades públicas".

Los sacrificios y obstáculos de los 'pilos'

Los beneficiados del programa 'Ser pilo paga' deben enfrentar una serie de obstáculos para poder terminar sus estudios, siempre con la amenaza de que se si se retira, deberá buscar todo el costo de la inversión.

Representantes estudiantiles de dos universidades privadas, quienes han estado al tanto de las falencias y los problemas a los que se ha enfrentaron los favorecidos con el programa 'Ser pilo paga' en su primer semestre, contaron algunos de los obstáculos que estos jóvenes han debido enfrentar.

Karen Noriega, representante de los estudiantes en la Universidad Javeriana, expuso: "los problemas

que ha tenido los pilos en la Universidad Javeriana han tenido que ver principalmente con el pago de los subsidios por parte del Ictetex, puesto que no se ha cumplido el cronograma. Otro tema importante ha sido la nivelación de inglés, porque los mismos estudiantes han comentado que los colegios de donde se graduaron no tenían buen nivel del idioma y en la universidad se exige un nivel B2 para graduarse de cual-

quier carrera; frente a esto, la universidad no se ha pronunciado aún. Finalmente, otro tema importante ha sido el subsidio de alimentación que da la Universidad Javeriana, pero solamente a la población de Estrato 1, lo que implica que el resto de estudiantes beneficiarios del programa, a quienes no les alcanza el subsidio de alimentación, deben hacer maromas para poder comer o, en su defecto, no comer".

En el último congreso de representantes estudiantiles se trató el tema de los 'pilos' y la conclusión es que "no paga", porque parafraseando a los prisioneros "deja a unos con laureles y futuros y a otros pateando piedras".



Karen Noriega agrega: "la primera crítica a este programa es que los beneficiarios no tienen una beca, sino un crédito; la segunda es que los dineros públicos de la educación

que el gobierno debería invertir en universidades públicas están siendo puestos en universidades privadas; y la tercera, es que se está privilegiando la educación y el derecho a esta, por cuanto los que son 'pilos' son quienes merecen educación superior y los que no, deben mirar cómo se las arreglan para acceder".

Lo peor es que a ningún pilo se le puede presentar una calamidad porque al problema de no tener recursos hoy, se le puede sumar el

de no tener nunca. Diego Pérez, representante de los estudiantes en la Escuela Colombiana de Ingeniería, habló sobre su institución explicó que "si un estudiante entra a la universidad de Los Andes, donde un semestre cuesta 13 millones de pesos, va acumular una deuda de 50 u 80 millones, compromiso que tendrá que asumir y pagar en caso de que se vea forzado a desertar como consecuencia de una calamidad o de cualquier factor externo". En otras palabras, las universidades privadas tienen segura su plata, el estudiante no tiene seguro su futuro.

Más trabajo comunitario y menos represión

En el posconflicto también es necesario replantear algunas funciones de las fuerzas armadas, pensar más en su labor de colaboración con la comunidad que en la represión de la violencia.

La paz debe traer consigo revisión de las fuerzas armadas, no solo en cuanto a número sino a funciones, para que éstas tengan que ver más con trabajo comunitario y social, y no con represión.

La propuesta de organizaciones de la sociedad civil es que, culminado el conflicto con las Farc, haya dos cambios fundamentales en la fuerza pública: su dimensión y las tareas que realiza. Marco Romero, director del Codhes, señaló: "hay zonas del territorio donde hay que buscar un camino de desmilitarización, pero hay otras zonas donde el Estado no tiene control del territorio, por lo que se necesita justamente que el Estado haga presencia civil en todas sus dimensiones y no solamente militar".

Finalizado el ciclo de violencia, el ejército debe dedicarse a las amenazas externas; la policía, a mantener el orden público y la convivencia; y ninguna a la represión. "Ahora se está hablando de una reforma al código de policía y ya en el Congreso apareció la tentación autoritaria de poner restricciones y prohibiciones a la movilización social, en este sentido, lo importante no es el tamaño de la fuerza pública, sino que el país no caiga en la lógica del autoritarismo tradicional", dice Romero.

Se debe poner en marcha

un plan que permita no solo a quienes dejen las armas tener un futuro en sus territorios, sino a todos los pueblos excluidos del desarrollo integral. "El plan de desarrollo no tiene una apuesta fuerte sobre el contenido principal de la paz, que es la paz territorial, porque el tema de fondo debe ser resolver los problemas estructurales de una sociedad rural donde los campesinos, indígenas y afrodescendientes se encuentran con necesidades básicas insatisfechas en unos niveles desproporcionados con respecto a la demás población del país", finalizó Romero.



ENCUENTRO: DIRECTOR, Jairo Arenas Acevedo. PERIODISTAS, Omaira Morales Arboleda y Yesid Quiroga López. PRODUCTORA, Jadith Amórtegui Acosta. CAMARÓGRAFO, Mauricio Ángel González. EDITOR, Gisella Zárate. DISEÑO Y CORRECCIÓN DE ESTILO, Ernesto Enrique Ballesteros.